



RECENSIONES

Gérard Chastagnaret, *Una vida por el Estado: Federico Botella y de Hornos, ingeniero de minas (1823-1899)*, Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 2020, 266 páginas, por Eduardo González Calleja (Universidad Carlos III), edgcalle@hum.uc3m.es

DOI: <https://doi.org/10.20318/hn.2023.7323>

El estudio de las élites funcionariales españolas está aún por hacer. Por ello es preciso dar la bienvenida a trabajos como el que aborda el profesor Gérard Chastagnaret sobre la figura de Federico Botella y de Hornos (Alicante, 1823-Madrid, 1899), hijo del exilio posterior al tumultuoso final del Trienio Liberal, y sucesor directo de la primera generación de ingenieros de minas; científicos hechos a sí mismos, agrimensores infatigables y hombres comprometidos con el progreso moral, político y material del país.

Su carrera como funcionario del ramo se vio salpicada por continuos conflictos con sus colegas y sus superiores, que deben ser enmarcados en los forcejeos corporativos, administrativos y empresariales de la época dorada de la minería española contemporánea.

Interesado desde hace medio siglo por el personaje, que tuvo una actuación destacada en la investigación realizada en 1877 sobre la toxicidad de algunos usos mineros practicados en la cuenca de Río Tinto, Chastagnaret emplea afundantes fuentes de archivo españolas y francesas (especialmente el fondo personal del biografiado, depositado en la BNE) para abordar una auténtica indagación detectivesca que arroja más incógnitas que certezas sobre su origen familiar y su trayectoria de juventud: de Marsella a París, y a La Habana en febrero de 1830, cuando su padre fue comisionado para gestionar los intereses económicos del liberal Joaquín María Ferrer. Hacia 1840, ya como miembro de una familia acomodada, retornó a París y en 1843 se escolarizó por tres años en la Escuela de Minas, donde recibió las enseñanzas de Frédéric Le Play y Elie de Beaumont, quien le apadrinó en 1854 en su ingreso en la Sociedad Geológica de Francia. En 1845 se trasladó a Madrid, donde culminó su carrera académica con prácticas en las minas de Almadén y Río Tinto. Ya entonces su formación previa le permitió una temprana promoción que no fue bien vista por algunos de sus condiscípulos relegados en el escalafón. El

enfrentamiento por motivaciones corporativas y profesionales, que fue una tónica de su vida derivó frecuentemente en lances de honor, el más notorio de los cuales fue el duelo espada que libró con su colega Lino Peñuelas y Fornesa el 31 de agosto de 1850.

Esta mentalidad, que entrevera valores premodernos como la honra con una visión técnico-profesional perfectamente moderna, es destacada por Chastagnaret, cuyo profundo conocimiento del colectivo de ingenieros de minas le brinda la oportunidad de elaborar un auténtico ensayo histórico sobre los avatares de este cuerpo del Estado especialmente zarandeado por los avatares de la política doméstica. El moderantismo instalado en el poder a partir de 1843 no podía soportar a un Cuerpo de Minas al que asimilaba con la regencia progresista de Espartero, razón por la cual las medidas represivas contra los grandes próceres de los orígenes del cuerpo se multiplicaron. A todo ello se sumó la Ley Minera de 1849, que favoreció la especulación al alargar los procesos de control, y que supuso un ataque al Cuerpo, ya que tanto el Tribunal Superior como la Dirección General de Minas se suprimieron, y los ingenieros jefes de cada distrito minero perdieron sus competencias administrativas en favor del gobernador civil, mientras que las atribuciones judiciales fueron transferidas a los tribunales. El autor interpreta esta crisis en clave ideológica: “maltratados por el poder moderado, los ingenieros de minas ofrecieron un caldo de cultivo tanto más fértil al adoctrinamiento liberal ofrecido en aquellos momentos, cuanto que no recibían ninguna formación macroeconómica” (p. 128). De ahí derivan, según Chastagnaret, los enfrentamientos librados en la segunda mitad del siglo XIX entre ultraliberales doctrinarios y defensores de un Estado fuerte e intervencionista. Botella, que se alineó decididamente con los segundos, vio muy pronto cómo su idealismo francófilo, partidario de la armonía entre la alta administración y el poder político (aspiración de origen bonapartista, mantenida durante la monarquía de julio) chocaba con la arbitrariedad y la corrupción que campaban en el Estado español durante la época isabelina.

Botella no ejerció más que doce años en la jefatura de distritos mineros (Valencia, Murcia), desde junio de 1851 a septiembre de 1863. En cambio, fue llamado a desempeñar diversas tareas, en ocasiones muy engorrosas y polémicas. El 8 de julio de 1865 ascendió a ingeniero jefe de primera clase y fue nombrado oficial de la Junta Superior Facultativa de Minería, el más alto organismo en su campo profesional. Su carrera continuó a partir de entonces en la Administración Central, lo que no le impidió participar en encendidas polémicas, como la mantenida en 1866 con su antiguo enemigo Lino Peñuelas (por entonces diputado progresista por el distrito de Almadén), en donde expresó su oposición a la venta de las minas

del Estado. Argumentaba que tal desamortización procuraría un capital inmediato, pero en detrimento de la renta. Por otro lado, la venta haría perder espacios de formación para los alumnos de ingeniería y también empleos, puesto que era muy probable un aumento de la productividad. Proponía un préstamo garantizado por la producción de cada explotación, tal como se había hecho en el caso de Almadén, la única gran mina del Estado que no cambió de manos en esa época. Esta apuesta por salvar la función productora del Estado es, a decir de Chastagnaret, perfectamente congruente con su ideología intervencionista. Sin embargo, el Decreto “dando bases generales para la nueva legislación de minas”, promulgado el 29 de diciembre de 1868, transformó las concesiones en una propiedad privada encubierta con el pago de una módica tasa anual, y dio libertad para acometer empresas de forma incontrolable, dada la ausencia de un reglamento de policía minera que no se publicó hasta 1897. De este modo, el cuerpo de ingenieros de minas, que fue cómplice de este desafuero, vio cómo se firmaba el acta de defunción de su principal cometido técnico.

Hasta 1877, los diversos cargos públicos que asumió permitieron a Botella conciliar las responsabilidades de gestión y los trabajos geológicos, que fueron siempre su gran pasión. Destacó su participación en las actividades de campo (itinerarios geológicos reflejados minuciosamente en sus cuadernos de trabajo, que incluyen dibujos propios y fotografías) impulsadas tras la refundación de la Comisión del Mapa Geológico por el decreto de 28 de abril de 1870, a cuyo frente fue nombrado Manuel Fernández de Castro en vez de Botella. El trabajo en las distintas provincias se terminó en 1889, hasta culminar en el mapa general a escala de 1/1.500.000. Casi en tono de venganza, en 1876 se empeñó en elaborar un ambicioso mapa geológico completo de la Península Ibérica a escala de 1/2.000.000, que culminó en 1879 y fue acremente contestado por la Comisión del Mapa Geológico. Afectado por esta nueva afrenta a su honor profesional, Botella buscó apoyo en otras élites científicas: la Sociedad Geográfica designó una comisión de evaluación del mapa, de la que formó parte su amigo el explorador Marcos Jiménez de la Espada.

Otro motivo de desavenencia fue la comisión facultativa creada para investigar las calcinaciones al aire libre de las piritas que practicaban las compañías explotadoras, en particular la británica Tharsis afincada en Huelva, lanzando a la atmósfera compuestos azufrados que producían ácido sulfúrico en contacto con el agua. Constituida en abril de 1877 bajo la presidencia de Botella, éste fue puesto muy pronto en el disparadero de los intereses de las grandes compañías y del poder municipal, que no aceptaron unas conclusiones que imponían

cuantiosas indemnizaciones y la paralización de las calcinaciones en una fecha límite. Con la aquiescencia de la Junta Superior Facultativa de Minería, la administración de Fomento lanzó una campaña de descalificación y rechazo de las resoluciones, hasta lograr el mantenimiento de las prácticas contaminantes a cambio de escasas indemnizaciones. Hábilmente amordazado, ésta fue la última comisión oficial que dirigió Botella. Los duros enfrentamientos de 1866 y 1877 con los poderes establecidos sellaron su ostracismo profesional. A partir de los años ochenta permaneció en Madrid, ostentando cargos más honoríficos que ejecutivos, alejados del poder. Frecuentó sociedades científicas, como la Sociedad Española de Historia Natural, la Sociedad Geográfica (donde en 1882 polemizó con Lucas Mallada sobre la supuesta pobreza de recursos naturales de España) y la Sociedad Española de Historia Natural. La querrela le había seguido acompañando en su tortuoso nombramiento como miembro de número de la Academia de Ciencias en diciembre de 1877. Chastagnaret destaca que la polémica con Mallada fue un punto de inflexión en su actuación pública. Desde entonces, utilizando preferentemente la tribuna que le brindaba la Sociedad Geográfica, opinó con mayor libertad sobre el futuro del país, pasando de luchar contra los partidarios acérrimos del liberalismo económico a enfrentarse a los exponentes pioneros de un nacionalismo regeneracionista que apenas estaba saliendo del limbo. Retoño del liberalismo más exaltado, pero precursor del conservadurismo tecnocrático comprometido con el desarrollo del país, Botella sirvió a los intereses del Estado en construcción al margen de las tendencias políticas alternantes.

Su retirada de la función pública fue todo menos placentera: tras obtener el tan deseado reconocimiento público y profesional en la Exposición Nacional de Minería de 1883, en agosto de 1887 Botella fue nombrado presidente de la Comisión Ejecutiva de Estadística Minera. Fue su desempeño oficial más importante y perdurable, al que Chastagnaret dedica un estudio muy detallado, centrado especialmente en el método de recopilación de datos de la producción minera utilizado por los ingenieros jefe de cada distrito. El asunto no era menor: si se producían verificaciones en profundidad de las declaraciones sobre producción, se pondría en evidencia la anomalía de la situación fiscal del sector y se haría injustificable el mantenimiento de una política hacendística tan complaciente. Los diagramas comparativos de la producción oficial y la real, confrontadas con las cifras de exportación, revelaban fraudes del 35 % en 1887 y hasta del 57,4% en 1889. Con este trasfondo de lucha contra la defraudación sistemática, la mejora de la calidad de las estadísticas se convirtió en el verdadero caballo de batalla de la gestión de Botella; casi una obsesión que se tradujo en la publicación de volúmenes anuales que se aproximaban a

las 900 páginas, lo que retrasaba inevitablemente su publicación y le llevó a una polémica postrera con la Revista Minera en 1893, y a la dimisión en 1895. Ascendido a la primera clase del escalafón de inspectores generales —el Olimpo de la profesión— en 1891, la superación de la edad límite para ello (65 años) la ocasionó un último y amargo enfrentamiento, cuando doce ingenieros del cuerpo ganaron un recurso contencioso que anulaba su promoción y le forzaba a pasar al retiro, aunque mantuvo el rango de inspector general de primera clase y la dirección del Servicio de estadística minera hasta 1895.

Científico reconocido pero rebelde de temperamento, Botella fue, a decir de su biógrafo, “un hombre con gran sentido del deber, respecto al servicio del Estado y, más aún, al del interés nacional. Fue un funcionario en estado puro, para el que cualquier paso por lo privado habría sido un extravío, pero también fue un funcionario sumiso, hábil sin duda, incluso maniobrero, pero incapaz de transigir con los grandes principios” (p. 232). Un servidor del Estado con una psicología compleja, que se granjeó numerosos enemigos interesados en silenciar sus logros. De ahí la dificultad para abordar la biografía integral de un personaje cuyas esperanzas, aspiraciones y ambiciones chocaron con frecuencia con los dobles juegos practicados por la élite política, la burocracia estatal y la corporación profesional. Asuntos que conoce a la perfección Gérard Chastagnaret, y que le facultan para recrear con excelente pulso literario (realzado por una muy buena traducción) y de forma convincente las virtudes, los defectos y las limitaciones de un sector clave de la alta administración española del ochocientos.